

REFLEXIONES DE UNA ABOGADA DE MIGRACIÓN Y ASILO EN TEXAS, A UN MES DE LA MASACRE DE INFANTES EN UVALDE

Erica Schommer

Vivo a unas 80 millas de Uvalde, en la ciudad de San Antonio, Texas, pero no soy texana. Crecí en el estado de Wisconsin, en el norte del país, en una familia de cazadores. Mi papá, mis abuelos y realmente la mayoría de los hombres adultos en mi vida de niña tenían armas, pero eran armas de cazar, no armas de matar. Cuando tenía 12 años, mi papá me enseñó a tirar. Acompañé a una amiga a cazar venados. Era otra época.

Tengo la edad suficiente para decir que nunca tuve que practicar dónde esconderme en mi salón. Me gradué de la prepa siete años antes de Columbine, una de los primeros tiroteos masivos en una escuela en Estados Unidos. Ver armas era completamente normal para mí, pero hoy en día, las odio, como odio la reverencia que se les tiene.

Desde 1999, se han presentado 337 tiroteos en escuelas estadounidenses, afectando a 300 mil estudiantes. Además, cientos de personas han sido asesinadas mientras hacían cosas cotidianas: comprar la despensa, bailar con amigos, asistir a servicios religiosos y conciertos. A pesar del incremento en tiroteos masivos en nuestras escuelas, iglesias, tiendas y espacios públicos, el gobierno federal no ha hecho nada. Esto se debe a que, hoy en día, en Estados Unidos la segunda enmienda constitucional, creada hace siglos para responder a una realidad muy distinta, se ha convertido en una institución intocable, de la cual estoy harta.

Estoy harta de escuchar tras cada nueva masacre que “no se puede hacer nada”. Estoy harta de políticos comprados por la Asociación Nacional de Rifles (National Rifle Association o NRA). Y

estoy harta de la mayoría de mis compatriotas quienes por décadas actúan como si fuera necesario e inevitable aceptar esa realidad brutal.

La reacción a los tiroteos masivos ya tiene un formato definido: primero, todos expresan sus “pensamientos y oraciones”; luego los políticos advierten que “no es el momento para la política”; finalmente, ocurre lo que para mí es lo más aterrador: en el transcurso de una semana, todo mundo vuelve a la normalidad, olvidando a los familiares de las víctimas y las comunidades afectadas. Es difícil entender cómo se puede olvidar tan rápidamente el horror de cada tiroteo masivo.

Pero a lo mejor es un mecanismo de sobrevivencia, porque la realidad es que la violencia de las armas es una epidemia en Estados Unidos. Los tiroteos masivos se transmiten en los noticieros, pero a diario por todo el país ocurren otros incidentes prevenibles que cobran la vida de 110 personas al día en promedio. Las armas son la causa principal de muerte de infantes y jóvenes de cero a 19 años de edad. La causa número uno. No son los accidentes automovilísticos, ni las drogas ni las enfermedades incurables. Son las armas. Algo que podríamos regular y controlar. Tiene más valor el derecho a portar un arma que las vidas de nuestras hijas e hijos. Como madre, me provoca una rabia intensa. Como adultos, se supone que tenemos la obligación de proteger a los más vulnerables y hemos hecho lo contrario, les hemos fallado completamente. Desde la masacre de Uvalde se han documentado más de 30 tiroteos masivos nuevos.

Hasta cierto punto, los distintos estados tienen la facultad de regular la venta y la posesión de armas, así que no es de sorprenderse que Texas sea número uno en posesión de armas por persona. Días antes de Uvalde, se publicó un estudio sobre la posesión de armas a nivel estatal. Rhode Island, un estado con algunas de las leyes más estrictas para la compraventa y posesión de armas, tiene la tasa más baja. Hace unos días, su congreso estatal aprobó nuevas restricciones. En Texas, en contraste, el número de víctimas por arma de fuego se ha incrementado y sus leyes para

controlarlas han ido en sentido contrario. En vez de implementar más restricciones, las reformas han hecho aún más fácil comprar y portar armas de fuego. En Texas no se requiere de una licencia para portar un arma en público. Pareciera que en vez de basarse en estudios sociales para implementar reformas, los políticos texanos recurren a la cultura vaquera del Viejo Oeste porque su respuesta es armar a todos, incluyendo maestros, para que puedan matar a cualquier *bad* hombre con una pistola.

Sin embargo, en Uvalde vimos que el mantra de “lo único que puede parar a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con otra” es mentira. A pesar de la presencia de policías y del guardia escolar fuertemente armados, además de otras medidas de seguridad recomendadas para prevenir una tragedia de este tipo, el joven de 18 años logró asesinar a 21 personas. Lo hizo mientras docenas de policías esperaban afuera de la escuela por más de una hora a pesar de que los niños gritaban desde el salón pidiendo ayuda. Aun así, y a pesar de saber que este problema es únicamente estadounidense, el gobernador y muchos políticos en Texas siguen diciendo de las armas no tienen la culpa.

Mi oposición a las armas ha aumentado a través de los años, pero ahora es más personal, porque la violencia me parece más cercana. En 2020, dos adolescentes, hijos de clientes míos, se volvieron parte de las estadísticas: murieron a los 15 y 17 años de edad por armas de fuego que nunca debieron haber estado cerca de ellos. Sus muertes me mostraron el impacto personal para cada familia afectada por la violencia de las armas. No es simplemente la pérdida de una vida, sino el daño permanente para sus seres queridos. Me partió el corazón ver a las madres de estos jóvenes, mujeres fuertes que migraron a Estados Unidos para darles una vida mejor a sus hijos, perder a sus hijos solamente por el capricho de alguien armado. Estados Unidos, un supuesto país seguro, el lugar para cumplir los sueños, los traicionó por el amor a las armas.

La violencia de las armas de fuego está por todos lados. Pienso en tres sencillos ejemplos de mi ciudad, San Antonio, en las últimas dos semanas. A las 2:00 am, las balas provenientes de un coche impactaron en la casa de una amiga mía y por poco entraron por la ventana de la recámara donde duerme su nieto de dos meses. Ahora está contemplando vender su casa porque está ubicada cerca de una zona de bares. El fin de semana pasado, una familia haciendo una carne asada en su jardín fueron baleados; dos de ellos murieron y cinco salieron lesionados. Hace unos días, me desperté para ver una alerta de mi universidad avisando a la comunidad estudiantil y docente de un tiroteo cerca del campus durante la noche. No estamos seguros en nuestras propias casas, escuelas o lugares de trabajo. Ni podemos ir de compras (masacre en Walmart de El Paso) o a la iglesia (masacre en Sutherland Springs, Texas). ¿Cuándo será suficiente? ¿Quién tiene que morir para que digan ya basta?

No habrá lugar seguro sin cambios legislativos.

A un mes de Uvalde, tengo algo de esperanza. Tal vez el horror que se vivió será lo que haga la diferencia y pasaremos de complacidos a participantes activos de nuestra democracia. El 11 de junio marcharon miles de personas en 450 ciudades exigiendo cambios y entre ellos había personas que sí tienen armas y quieren conservarlas. Por la primera vez, se está planteando la idea de que las regulaciones razonables no implican la prohibición de las armas. Al contrario, el fin es prevenir más masacres. El Senado acaba de aprobar un paquete de reformas legislativas que, si llegan a ser ley, serán las primeras restricciones federales sobre armas en más de 20 años. Dichas reformas no son suficientes y queda mucho por hacer, pero si se logra, será un paso grande para demostrar que sí se puede cambiar nuestra relación con las armas de una vez por todas.

Dado que la suprema corte conservadora que el Presidente Trump nos dejó acaba de fallar a favor de la libertad de portar armas, tumbando una ley del estado de Nueva York, es aún más importante

presionar para cambios al nivel federal. En Texas, la tragedia de Uvalde ha generado activismo a favor del candidato demócrata para suceder al gobernador republicano Greg Abbott, quien nunca hará nada para limitar la posesión de armas. Espero que no haya marcha atrás y que miles de estudiantes, padres, madres, abuelos, y maestros podamos seguir la lucha. Confío en que, marchando, votando y educando, vamos a poder construir, paso por paso, una sociedad en la cual se puede estudiar, trabajar, rezar y vivir libre de miedo.

Erica Schommer es abogada de inmigración y asilo, profesora de derecho en la Universidad de St. Mary's, y madre de una estudiante de escuela pública. Fue ponente en el Seminario de Estudios Críticos del Derecho en enero 2022.